



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

INFORME SECRETARIAL

Barranquilla, 24/07/2020

Radicado	08-001-33-33-014-2020-00049-00
Medio de control o Acción	Protección de los derechos e intereses colectivos (Acción Popular)
Demandante	Elsa Margarita Noguera De la Espriella
Demandado	E.S.E. Hospital Universitario CARI; Ulahi Dan Beltrán López, Gerente del Hospital Universitario CARI E.S.E.; y Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe
Juez(a)	Guillermo Osorio Afanador

INFORME
Señor juez, paso a su despacho el expediente de la referencia, informando que se encuentra vencido el término de traslado de la medida cautelar que fuere solicitada por la parte demandante. Es del caso mencionar, que la solicitud de medida cautelar de urgencia solicitada por la parte actora, fue negada por esta agencia judicial, y adecuada por este Despacho, de conformidad a lo señalado en el artículo 233 de la ley 1437 de 2011, por lo que se hizo necesario efectuar el correspondiente traslado de la medida a la parte demandada.

PASA AL DESPACHO
Para proferir auto resolviendo la medida cautelar.

CONSTANCIA
Solicitud de medida cautelar visible a folios 72-75 del expediente principal, y 1156-1159 memorial de subsanación. Memorial de fecha 01 de julio de 2020 (suscrito por la parte demandada Hospital Universitario CARI, enviado al buzón correo electrónico del Despacho y de la oficina de servicios de los juzgados administrativos; memorial de fecha 13 de julio de 2020 (adición y ampliación pronunciamiento a la medida cautelar suscrito por la parte demandada Hospital Universitario CARI, enviado al buzón de correo electrónico de la oficina de servicios de los juzgados administrativos.

Alberto Luis Oyaga Larios
SECRETARIO

Ultimo Folio Digitalizado y número de cuaderno	Firma de Revisado



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, veinticuatro (24) de julio de dos mil veinte (2020)

Radicado	08-001-33-33-014-2020-00049-00
Medio de control o Acción	Protección de los derechos e intereses colectivos (Acción Popular)
Demandante	Elsa Margarita Noguera De La Espriella
Demandado	E.S.E. Hospital Universitario CARI; Ulahi Dan Beltrán López, Gerente del Hospital Universitario CARI E.S.E.; y Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe
Juez(a)	Guillermo Osorio Afanador

CONSIDERACIONES

Procede el Despacho a resolver la solicitud de la medida cautelar que inicialmente se propuso como de urgencia y que este Despacho decidió rechazar por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 231 del CPACA, por lo cual se decidió adecuarla a la medida cautelar de conformidad con lo señalado en el artículo 233 de la ley 1437 de 2011, lo que condujo a que se corriera traslado a la parte demandada.

La medida cautelar solicitada consiste en la suspensión de la ejecución del contrato de operación No.690 de 27 de diciembre de 2019, suscrito entre el Hospital Universitario CARI E.S.E. y el Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe.

- ANTECEDENTES.

La doctora Elsa Margarita Noguera De La Espriella, en su calidad de Gobernadora del Departamento del Atlántico, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 2 de la Ley 472 de 1998 y artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA-, instauró demanda en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos en contra de la **E.S.E. Hospital Universitario CARI; el doctor Ulahi Dan Beltrán López, Gerente del Hospital Universitario CARI E.S.E.; y el Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe**, tendiente a que se protejan los derechos colectivos a la moralidad administrativa, defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad pública, la libre competencia económica y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, que según se afirma, se encuentran vulnerados por la contratación directa que hiciera el Gerente del Hospital Universitario CARI E.S.E. con el consorcio Gestor Hospitalario del Caribe, lo cual quedó registrado en el contrato de operación No. 690 de fecha 27 de diciembre de 2019.

Mediante auto de fecha 18 de febrero de 2020, esta agencia judicial resolvió inadmitir la demanda, en consideración a que no se evidenciaba el agotamiento del requisito de procedibilidad previsto en el inciso tercero del artículo 144 del CPACA, y concedió el término de (3) tres días para que el demandante subsanará el defecto aludido.

Dentro del término legal concedido, la parte actora presentó memorial de fecha 21 de febrero de 2020, y subsanó la demanda presentando el requisito de procedibilidad en mención.

Este Despacho admitió la demanda mediante auto de fecha 02 de marzo de 2020.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Mediante auto separado de fecha 02 de marzo de 2020, esta Agencia Judicial decidió rechazar la solicitud de medida cautelar de urgencia invocada por la parte demandante, en consideración a que no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 231 de la ley 1437 de 2011, por lo cual se hizo necesario correr traslado de la medida cautelar a la parte demandada, en cumplimiento de lo normado en el artículo 233 del CPACA.

1.2. Solicitud de medida cautelar.

En el mismo libelo de la demanda radicada de fecha 12 de febrero de 2020, la parte actora solicitó se decrete la siguiente medida cautelar de urgencia, invocando el artículo 234 del CPACA, como se mencionó, la medida de urgencia fue negada por este despacho, sin embargo, comoquiera que se adecuó al trámite del artículo 233 y se corrió traslado a la parte demandada se resolverá ahora teniendo en cuenta la misma solicitud, empero, con las respuestas dadas por la parte demandada. En ese sentido, la solicitud de medida cautelar es la siguiente:

“Suspensión de la ejecución del contrato No.690 de fecha 27 de diciembre de 2019”

Como fundamento de la cautela expuso que la convocatoria pública No. 001 de 2019, se presentó un solo oferente lo que impidió obtener los beneficios derivados de la optimización del valor producto de la pluralidad de oferentes.

Que el Gerente del Hospital Universitario CARI celebró el contrato de operación No. 690 de 27 de diciembre de 2019 sin autorización de la Junta Directiva, lo que deviene en su nulidad absoluta.

Y que la celebración del contrato de operación No. 690 del 27 de diciembre de 2019, por medio del mecanismo de contratación directa, genera serias dudas acerca de la observancia de los principios de la contratación pública, máxime cuando existieron serias y fundadas observaciones por parte de la Procuraduría Delegada para la Salud, la protección social y el Trabajo Decente a la convocatoria pública No.001 de 2019 y que en últimas fue declarada “desierta” por razones inocuas.

1.3. Traslado de la medida Cautelar

Respuesta de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI.

La parte demandada Hospital Universitario CARI, dio respuesta mediante sendos memoriales, de fechas 01 de julio de 2020 y 13 de julio de 2020, refiriéndose a la medida cautelar.

Sin embargo, no se tendrán en consideración para resolver la solicitud de medida cautelar, comoquiera que los memoriales fueron radicados de forma extemporánea, tal y como se pasa a explicar.

Mediante auto de fecha 02 de marzo de 2020, esta Agencia Judicial resolvió negar la medida cautelar de urgencia, y se adecuó la medida de conformidad con lo normado en el artículo 233 del CPACA, por lo cual, se corrió traslado a la parte demandada por el término de cinco días, a fin que se pronunciaran al respecto, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria del auto en mención.

Como se observa a folios 1224 al 1226 el auto de fecha 02 de marzo de 2020 fue notificado a las partes el día 03 de marzo de 2020, quedando ejecutoriado el viernes 06 de marzo de



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

2020. Por lo cual el término de cinco (5) días comenzó a contarse el lunes 09 de marzo de 2020 y finalizó el viernes 13 de marzo de 2020. Es decir, que hasta esa fecha tenían plazo para pronunciarse respecto de la medida cautelar.

Como es de público conocimiento sólo a partir del lunes 16 de marzo de 2020 se suspendieron los términos judiciales mediante ACUERDO PCSJA20-11517 de fecha 15 de marzo de 2020, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, con ocasión de la emergencia sanitaria decretada en todo el país por el Gobierno Nacional. Por lo cual no es de recibo, el argumento planteado por la parte demandada E.S.E Hospital Universitario CARI, que se adelanta a decir que la respuesta fue presentada en oportunidad: “dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del auto que pone en conocimiento la solicitud”.

Por otro lado, los demandados Ulahi Dan Beltrán López, y Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe no hicieron uso del término del traslado de la medida cautelar.

2.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo.

Las medidas cautelares son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento jurídico protege, de manera provisional y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso¹.

La acción popular consagrada en el inciso primero del artículo 88 de la Constitución Política, y reglamentada mediante la ley 472 de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados o cuando exista peligro, agravio, o un daño contingente por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares que actúan en desarrollo de funciones públicas. Los supuestos sustanciales de la acción popular son los siguientes: (i) una acción u omisión de la parte demandada, (ii) un daño contingente, peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y (iii) la relación de causalidad entre la acción y omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses; dichos supuestos deben ser demostrados de manera idónea en el proceso respectivo.²

La finalidad de la acción popular es la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva, ejerciéndose para evitar el daño o hacer cesar el agravio sobre los derechos colectivos y así restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

La Ley 472 de 1998, en su artículo 25 señala:

“Artículo 25. Medidas Cautelares. Antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso podrá el juez, de oficio o a petición de parte, decretar, debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado. En particular, podrá decretar las siguientes: a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando; b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado; c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de las anteriores medidas previas; d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medidas urgentes a tomar para mitigarlo. PARÁGRAFO 1o. El decreto y práctica de las medidas previas no suspenderá el curso del proceso. PARÁGRAFO 2o. Cuando se

¹ Ver ampliación de esta definición en la sentencia C- 379 de 2004, de la Corte Constitucional.

² Radicación No. 52001-23-33-000-2015-00179-01, sentencia del 15 de septiembre de 2016, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

trate de una amenaza por razón de una omisión atribuida a una autoridad o persona particular, el juez deberá ordenar el cumplimiento inmediato de la acción que fuere necesaria, para lo cual otorgará un término perentorio. Si el peligro es inminente podrá ordenar que el acto, la obra o la acción la ejecute el actor o la comunidad amenazada, a costa del demandado.

“ARTÍCULO 26. OPOSICIÓN A LAS MEDIDAS CAUTELARES. El auto que decrete las medidas previas será notificado al demandado simultáneamente con la admisión de la demanda y podrá ser objeto de los recursos de reposición y de apelación; los recursos se concederán en el efecto devolutivo y deberán ser resueltos en el término de cinco días. La oposición a las medidas previas sólo podrá fundamentarse en los siguientes casos: a) Evitar mayores perjuicios al derecho o interés colectivo que se pretende proteger; b) Evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público; c) Evitar al demandado perjuicios cuya gravedad sea tal que le haga prácticamente imposible cumplir un eventual fallo desfavorable. Corresponde a quien alegue estas causales demostrarlas”. (Subrayado del Despacho).

Así las cosas, teniendo en cuenta la naturaleza de la acción popular, las medidas cautelares constituyen un mecanismo previo que tiene por objeto impedir perjuicios irremediables e irreparables, o suspender los hechos generadores de la amenaza a los derechos e intereses colectivos.

En ese orden de ideas, como lo ha señalado el Consejo de Estado, «[...] acorde con la finalidad protectora de los derechos e intereses colectivos de la Ley 472 de 1998, las medidas previas buscan hacer efectiva dicha protección, cuando de esperarse a la culminación del proceso, las medidas que se adopten en el fallo podrían resultar ineficaces, es decir, buscan conjurar de manera previa al fallo, un peligro o vulneración que se está presentando o que se percibe como de inminente ocurrencia y que no da tiempo a esperar por un fallo definitivo. // Entonces, el objetivo pretendido con las medidas previas, es el de evitar que el daño se concrete o que de estarse produciendo, no se prolongue por un término mayor [...]».

En desarrollo de las citadas disposiciones, la Sección Primera del Consejo de Estado, en proveído de 6 de febrero de 2014⁴, estableció:

“[...] Los mencionados presupuestos para la procedencia de una medida cautelar, de acuerdo con la citada normativa, hacen relación a lo siguiente:

a) Que esté debidamente demostrado en el proceso la inminencia de un daño a los derechos colectivos o que el mismo se haya producido, esto con el fin de justificar la imposición de la medida cautelar, el cual es prevenir aquel daño que está por producirse o a hacer cesar aquel que ya se consumó;

De lo anterior se concluye i) que para el decreto de la medida cautelar es indispensable determinar la existencia de un daño o agravio o la amenaza al derecho colectivo invocado, y ii) corresponde a quien alegue dichas causales, demostrarlas, pues de lo contrario la solicitud carecería de fundamento.

Con la expedición de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) se instituyó un amplio y novedoso sistema de medidas cautelares, aplicables en aquellos casos en que se consideren “necesarias para proteger y

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 18 de julio de 2007, Rad. No. 08001-23-31-000-2005-03595-01(AP). C.P.: Ramiro Saavedra Becerra.

⁴ Consejo de Estado. Sección Primera. Auto de seis (6) de febrero de dos mil catorce (2014). Expediente. Rad. 2013-00941. Magistrada Ponente María Claudia Rojas Lasso



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia" (artículo 229).

Los artículos 229 y siguientes del nuevo Estatuto presentan el régimen cautelar del procedimiento contencioso administrativo como un instrumento concreto de la garantía efectiva y material de acceso a la Administración de Justicia que busca evitar que la duración del proceso afecte a quien acude a la Jurisdicción en procura de solucionar una determinada controversia.⁵

De conformidad con el artículo 231 del C.P.A.C.A, son requisitos para decretar las medidas cautelares los siguientes:

"Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. (...) En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurren los siguientes requisitos: 1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho. 2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados. 3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. 4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios"

A la luz de las normas antes citadas, al igual que frente a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, es necesario a través de los medios probatorios correspondientes, determinar la existencia de un daño, agravio o la amenaza al derecho colectivo, para que la cautela solicitada tenga posibilidades de ser decretada.

El artículo 233 ibídem, establece el procedimiento para la adopción de las medidas cautelares:

“ Artículo 233. Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares

La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso.

El Juez o Magistrado Ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente al de la contestación de la demanda.

Esta decisión, que se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la demanda, no será objeto de recursos. De la solicitud presentada en el curso del proceso, se dará traslado a la otra parte al día siguiente de su recepción en la forma establecida en el artículo 108 del Código de Procedimiento Civil.

El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre ella. En este mismo auto el Juez o Magistrado Ponente deberá fijar la caución. La medida cautelar solo podrá hacerse efectiva a partir de la ejecutoria del auto que acepte la caución prestada.

⁵ Sobre la finalidad de las medidas cautelares, consultar providencia de 13 de mayo de 2015 (Expediente núm. 2015-00022, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa), en la que se aseveró: "...se busca evitar que la duración del proceso afecte a quien acude a la Jurisdicción, a tal punto que para el momento de obtener una decisión favorable se torne en ilusorio el ejercicio del derecho reconocido, pues al decir de Chiovenda 'la necesidad de servirse del proceso para conseguir la razón no debe convertirse en daño para quien tiene la razón.'"



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Con todo, si la medida cautelar se solicita en audiencia se correrá traslado durante la misma a la otra parte para que se pronuncie sobre ella y una vez evaluada por el Juez o Magistrado Ponente podrá ser decretada en la misma audiencia.

Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra el auto que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso.

Tratándose de un proceso que tiene por finalidad la defensa de los derechos e intereses colectivos y que el solicitante es una entidad pública, según preceptúa el inciso tercero del artículo 232 ibídem, no es necesario prestar caución.

- El caso concreto.

El actor popular solicita la suspensión de la ejecución del contrato No. 690 de fecha 27 de diciembre de 2019 y afirma que “de no decretarse se ocasionaría un perjuicio irremediable, basado en la actuación ilegal e inconstitucional, que se ventiló ante la jurisdicción” en ese sentido expone el actor popular en su demanda que el contrato de operación No. 690 de 27 de diciembre de 2019, así como la convocatoria pública No. 001 de 2019 que fue declarada desierta hubo varias actuaciones contrarias a la diligencia y el cuidado de un buen funcionario público, lo cual desconoce según su dicho la moralidad y transparencia que debe predicarse de la actividad pública.

Adujo que dichas falencias fueron detectadas por la Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente en la Convocatoria Pública No.001 de 2019 y que hacían relación a aspectos de fondo —jurídicos, técnicos, económicos, financieros y cumplimientos de requisitos legales—, así mismo iniciaron el trámite de contratación directa sin la autorización de la Junta Directiva del Hospital Universitario CARI E.S.E. y a su vez se dio inicio a la contratación sin que se encontrara en firme la decisión de declarar desierta la convocatoria pública, lo cual da cuenta de una actuación administrativa que no se adecúa a los postulados que exige el principio constitucional y a la vez, derecho colectivo de la moralidad administrativa.

Con respecto a la defensa del patrimonio público afirmó el actor popular que se ve afectado, en tanto la infraestructura, personal, usuarios, contratistas, proveedores y todos los demás partícipes en la actividad prestadora de servicios de salud que tiene el Hospital Universitario CARI E.S.E., tiene un valor apreciable patrimonialmente y dicho conjunto de bienes se entrega a un tercero para su operación, por lo cual se espera se reciba una contraprestación, con lo cual concluye que el contrato No.690 de 2019 tiene un valor multimillonario en razón a que fue suscrito por el término de quince años.

Por otra parte, se refiere a la presunta vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública, manifestando que por tratarse el Hospital Universitario CARI de una Institución prestadora de servicios de salud de alta influencia en la región, al radicar la administración de su operación en manos de un particular, por el término de 15 años y el control de sumas multimillonarias, por medio del trámite de contratación directa, y previa declaratoria de desierta de una convocatoria pública que no satisfacía los principios de contratación pública de un tema tan relevante, es latente la afectación de dicho derecho colectivo.

En relación con el derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, afirmó que la celebración del contrato No. 690 del 27 de diciembre de 2019, implica poner a disposición del Consorcio Gestor Hospitalario del



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Caribe, los bienes muebles e inmuebles del Hospital Universitario CARI, con lo cual se estaría radicando su administración a un tercero particular.

Finalmente adujo el actor popular que la participación de un oferente único en la convocatoria pública No. 001 de 2019 afecta el derecho colectivo a la libre competencia económica, y que en el referenciado contrato, aunque se establecen algunos deberes por parte del Consorcio Privado, en cuanto a la oportunidad y calidad de los servicios, los mismos son muy generales y dejan un amplio margen de interpretación por lo que se estaría vulnerando el acceso a los servicios públicos y a que su afectación sea eficiente y oportuna.

Ahora bien, según se expuso, la parte actora solicitó como medida cautelar la suspensión de la ejecución del contrato No.690 de fecha 27 de diciembre de 2019.

En ese sentido es del caso traer a colación lo expuesto por la parte actora para sustentar la medida cautelar:

“Sobre el peligro en la mora, es claro, que con la ejecución del Contrato de operación No. 690 de 2019 se advierte la inminencia de la consolidación de la vulneración y amenaza de los derechos colectivos accionados, los cuales podrían consolidarse, mucho antes que el Juez Constitucional pueda pronunciarse de fondo sobre los serios cuestionamientos jurídicos que rodean la actuación del HU CARI y del Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe”

Ahora, bien es del caso mencionar que la parte actora presentó escrito de subsanación en el cual adiciona otros argumentos, pero orientados esta vez a sustentar un perjuicio irremediable, por lo cual se citan a continuación:

“**Medidas urgentes:** Para la protección del derecho a la salud y la garantía de prestación de servicios de salud a miles de Atlanticenses que a diario acuden al Hospital Universitario CARI E.S.E., en especial en la ciudad de Barranquilla, es preciso que no se continúe adelante con el contrato de operación No. 690 de 2019”.

Como se mencionó, la parte demandada E.S.E. Hospital Universitario CARI, allegó sendos escritos de fecha 01 de julio de 2020 y 13 julio de 2020, los cuales arrimaron de forma extemporánea, por lo cual no serán analizados por este Despacho.

En ese sentido, comoquiera que los aspectos fácticos y jurídicos esbozados durante el trámite de la medida cautelar no han cambiado, posterior a la fecha del auto adiado 02 de marzo de 2020, -por medio del cual se negó la medida cautelar de urgencia, se adecuó al trámite de la medida cautelar señalada en el artículo 233 del CPACA y se corrió traslado a la parte demandante para que se pronunciara al respecto-, este despacho se atiene a los argumentos señalados en el auto de fecha 02 de marzo de 2020, proferido por esta agencia judicial, para negar también la medida cautelar que fuere adecuada por este despacho al trámite señalado en el artículo 233 en comento.

Así las cosas, se negará la medida cautelar, comoquiera que a pesar del material probatorio allegado dentro del presente trámite, no es suficiente para constatar las amenazas o afectaciones que según alega en los hechos la parte actora, se producen por el contrato No. 690 del 27 de diciembre de 2019.

Se reitera, como se señaló en el auto de fecha 02 de marzo de 2020, que es menester realizar un análisis interpretativo y probatorio de fondo que no es posible adelantar en éste momento procesal, el estudio profundo de elementos probatorios soportarían tanto los fundamentos fácticos del libelo petitorio como de las argumentaciones que en su momento



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

pueda esbozar la entidad y el consorcio acusado en la contestación de la demanda, a fin de poner en contradicción los elementos que se pretenden tener como prueba, para que realmente sea tenida como tal.

Además, la parte actora no acreditó los presupuestos del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, en especial lo señalado en el numeral tercero del mencionado artículo que señala, “Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla”.

Aunado a lo señalado en el literal a) del numeral cuarto ibidem: “Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable”.

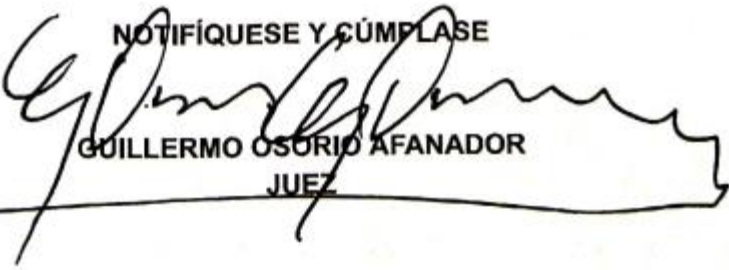
Por lo anteriormente expuesto, se rechazará la medida cautelar señalada en el artículo 233 de la ley 1437 de 2011, solicitada por la demandante.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla,

RESUELVE:

1°.- NEGAR la solicitud de medida cautelar presentada por la parte actora en el escrito de demanda.

2°.- Notificar el presente auto por estado electrónico, de la forma prevista en el artículo 9° del Decreto 806 de 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO OSORIO AFANADOR
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRONICO
N° 077 DE HOY 27/07/2020 A LAS 8:00 A.M.



ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 201 DEL CPACA